

ARQUEOLOGÍA URBANA, INVESTIGACIÓN Y PROFESIÓN

VICENTE SALVATIERRA CUENCA

Universidad de Jaén

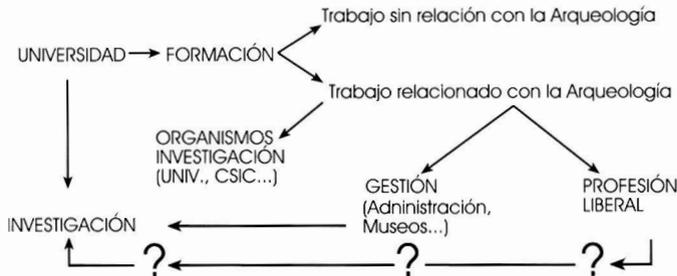
RESUMEN

Este texto parte de la identificación entre Arqueología urbana y Arqueología profesional. Se abordan dos de los retos que el desarrollo de la misma está planteando a la Universidad: la preparación de los especialistas y el problema de la investigación posterior a la excavación.

ABSTRACT

This text identifies urban Archaeology with professional Archaeology. Two are the challenges that its development is creating to the University: the training of the specialists and the problem about the research following the excavations.

Universidad y Arqueología.



"...no nos engañemos, la falta de recursos es el camino más rápido a la dependencia, y a que tales grupos no pasen de ser meros apéndices de los que actualmente existen. No parece demasiado pedir que una política arqueológica coherente empiece por asegurar a los investigadores un lugar donde trabajar, sin tener que depender de la buena voluntad de nadie o de acuerdos sin sentido..."
(Salvatierra, 1994)

Considero que uno de los temas más importantes a los que se enfrenta hoy la Universidad en relación a la Arqueología, es el de su incapacidad hasta ahora de responder coherentemente al doble desarrollo de la Arqueología urbana y de la Arqueología profesional. En realidad ambos temas son uno sólo, ya que aunque por el momento la mayor parte de las intervenciones de los arqueólogos profesionales se centran en las ciudades, es evidente que en un futuro, que ya es presente, su campo de actuación va a abrirse totalmente.

Debo apresurarme a señalar que mi percepción de la Arqueología profesional se hace desde la perspectiva de alguien que trabaja en la Universidad, es por tanto inevitablemente parcial, pero creo que es preciso que los distintos sectores formulen sus propias visiones acerca de los problemas que tiene o genera el desarrollo de esta nueva profesión, como único modo de reconstruir y comprender una realidad que es más compleja y poliédrica de lo que quizá a todos nos gustaría que fuera. Creo que la cuestión básica es teorizar cuál es la situación actual, o más sencillamente, identificar realmente dónde se sitúan los problemas. Sigo siendo un convencido, de que no hay nada más práctico que una buena teoría, y que para elaborar ésta es necesario identificar antes los elementos que deben integrarla y los problemas a resolver.

Es obvio que en el tiempo disponible no sería posible abordar todas las cuestiones que pueden plantearse y que hoy forman el conjunto de los problemas de la Arqueología Profesional. Por ello me centraré en dos temas que considero que constituyen lo esencial: 1º) el problema de la preparación de quienes intervienen en la Arqueología urbana, o más bien la falta de respuestas de la Universidad ante el problema

de cómo preparar a quienes quieren dedicarse a la Arqueología profesional. Y 2º) cómo conseguir que la documentación de las excavaciones realizadas por profesionales, es decir el 80 % de las urbanas, entre en los circuitos de investigación, o dicho de otro modo, cómo conseguir que se estudien los cientos de excavaciones que se efectúan cada año, y que son vitales para el conocimiento histórico.

Sé que en muchos lugares se están dando soluciones concretas, pero creo que la cuestión tiene la suficiente relevancia como para que deba abordarse desde un punto de vista estructural, y no de forma voluntarista, y dependiendo de que en una ciudad existan o no personas con la suficiente consciencia e influencia como para solucionar los problemas locales.

Tengo que reconocer que la suposición de que estos temas son relevantes es una consideración personal, ni siquiera compartida por una gran parte de los especialistas de la Universidad, para la mayoría de los cuales estos problemas ni siquiera existen. Basta para advertirlo con echar un vistazo a las diversas propuestas de planes de estudio de una hipotética licenciatura en Arqueología, donde se insiste en una especialización exclusivamente prehistórica y clásica, con planteamientos de "inventario", y sin que la Arqueología como profesión aparezca por ninguna parte. O también podemos recordar las *Jornadas de Arqueología de Almería*, donde algunos de los especialistas presentes parece que consideraban que el principal problema actual de la Arqueología era la falta de espacio existente en los museos para almacenar materiales, por lo que se proponía el "expurgo", es decir, la destrucción pura y simple de los materiales que a priori –es decir, antes de su estudio- se consideren inútiles.

Pero tampoco creo que las dos cuestiones enunciadas sean exactamente las que la mayoría de los profesionales de la Arqueología urbana situarían en el primer lugar de sus problemas. En el momento actual hemos llegado ya al modelo anglosajón, donde los arqueólogos de la Universidad o de otros centros de investigación y gran parte de los arqueólogos profesionales son dos grupos de personas-intereses distintos y separados. Pero con la diferencia de que da la impresión de que aquí la Universidad y también parte de la administración pública (en Almería no fueron invitados los profesionales) intentan negar que existan los profesionales, o que estos hayan llegado para quedarse, como si en un hipotético futuro la actual situación fuera a ser “reconducida” a la situación de los años ochenta.

Soy un convencido de que los problemas que puede tener una disciplina varían con el tiempo. Aunque a menudo pueda parecer que estos son los mismos de siempre, en realidad suelen cambiar muy rápidamente, y su aparente persistencia en realidad envuelve problemáticas distintas que en consecuencia deben resolverse desde otros enfoques. La mejor forma de advertir si ha habido cambios o no, es indudablemente el análisis histórico, que por otro lado es nuestro propio campo de trabajo.

En este sentido cabe preguntarse si la forma de abordar la Arqueología en las ciudades ha cambiado o no en el transcurso de los últimos años. La respuesta es que sí, y mucho. Por centrarnos sólo en los últimos 20 años, creo que cabe señalar tres periodos. Naturalmente la periodización para tiempos próximos a nosotros es algo inevitablemente subjetivo, ya que depende de los aspectos que se traten, de los datos que conozca quien la hace, y de su propia posición y evolución ante la situación. Pero creo

que estos tres periodos pueden ser aceptados por todos, aunque los ritmos y la cronología varíen ligeramente de un lugar a otro:

Como “prehistoria” de la Arqueología urbana en España podemos considerar un período entre finales de los años setenta y mediados de los ochenta, cuando bajo el rótulo de investigación en las “ciudades pluriestratificadas” se inicia el estudio de la fase romana de algunas de las grandes ciudades del Imperio en Hispania, que han seguido ocupadas hasta el presente: Córdoba, Zaragoza, Tarragona, Mérida... Raramente se hacía mención en esos estudios a los niveles posteriores a época romana. Ni tampoco se publicaban la mayor parte de los resultados.

FASE I

La transformación política de España, con el surgimiento de las Comunidades Autónomas, y la transferencia de competencias en Arqueología a las mismas, supuso una lenta pero profunda transformación. En Andalucía esta fase se inicia de la mano de un círculo muy reducido de arqueólogos, algunos ligados a las Universidades y a los grupos de investigación reconocidos por la Junta de Andalucía, pero sobre todo será impulsada por algunos de los integrantes de la incipiente estructura administrativa (arqueólogos provinciales) que creó la Junta, que era además la que financiaba las intervenciones. Aunque las cronologías varían ligeramente según la provincia de que se trate, podemos considerar de modo general que el período se inicia hacia 1985-1986 y finaliza oficialmente entre 1992 y 1993. De hecho había terminado algo antes, ya que aunque inicialmente se estableció una subordinación, en cuanto a la intervención arqueológica, de la Estructura

Administrativa a la Comisión de Arqueología, formada por profesores universitarios, a medida que dicha Estructura Administrativa creció y se consolidó, sus miembros pugnarón, lógicamente, por librarse de dicho control. Y simultáneamente si en principio los arqueólogos de la administración ejercían un control profundo sobre las intervenciones de urgencia, -a menudo aparecían como director y primer firmante de todas las intervenciones- paulatinamente se quedaron sólo con la supervisión.

De esta etapa me ocupé en su momento, en algunas de sus vertientes, y sigo creyendo en la corrección del conjunto del análisis realizado entonces, aunque hoy matizaría algunos aspectos, en primer lugar introduciendo una visión más dinámica de la que entonces presenté. Entre los rasgos específicos a matizar el que más afecta a la situación actual es la constatación de que es entonces cuando empieza a formarse un grupo de arqueólogos que sobreviven en base a la realización de excavaciones urbanas, algo que antes no había existido. Pero en esos años dichos arqueólogos aún tenían que estar ligados o apoyados en la práctica por alguna entidad oficial (Universidad, museo, delegación provincial...) que les avalase, en una especie de "protectorado", que en esos momentos aún era considerado "natural".

FASE II

Solapándose ligeramente con la anterior, y a pesar de la importancia de los aspectos anteriores, considero que el segundo período se inicia realmente hacia 1991-1992, cuando la Junta de Andalucía decidió modificar el "modelo" en dos aspectos fundamentales. Por un lado, no continuando con la financiación de las inter-

venciones, y obligando de modo generalizado -hasta ese momento había sido algo parcial y esporádico- a que estas corrieran por cuenta de los promotores o constructores. El motivo eran los costes crecientes. Se estudiaron diversas alternativas para que esos costes no acabaran repercutiendo en los consumidores (los compradores de los pisos), pero no se llegó a nada. Pero este cambio abrió definitivamente la vía a la aparición de los arqueólogos independientes, libres o profesionales -de todas esas formas se denominaron en esos años- rompiéndose el patronazgo anterior, ya que el mercado impondría muy pronto sus normas de libertad de contratación.

Pero contradictoriamente con esto, la Junta de Andalucía, aceptando las propuestas de la Comisión Andaluza de Arqueología, completó el "modelo" estableciendo que todo el proceso relativo a las intervenciones en las ciudades debía estar controlado desde la Universidad, para garantizar los resultados científicos. A la estructura administrativa de la propia Junta se le reservaba el papel de control último, pero sin que quedase demasiado claro como se concretaría este.

Por mi parte, no es un secreto entre los arqueólogos más "maduros", que me opuse radicalmente a ese "modelo" desde sus inicios. En relación a la financiación, porque entendía que era una obligación de la administración pública financiar los trabajos, al menos en lo tocante al sueldo de los arqueólogos, de forma que pudiesen soportar mejor las presiones que pudiesen ejercer los promotores y los otros agentes que intervienen en la ciudad.

Por lo que se refiere al papel que se pretendía dar a las Universidades, me opuse porque consideraba que en la práctica las mismas no

podían garantizar la calidad de las intervenciones en las ciudades, en buena medida porque los niveles dominantes en la mayoría de estas últimas eran los medievales, y en la mayor parte de las Universidades faltaban, entonces como ahora, especialistas en esas etapas, y sobre todo porque muy pocos departamentos universitarios tenían auténtico interés en el estudio de la ciudad en su conjunto¹.

Como sabemos, uno de los mayores problemas que creó ese “modelo” en algunas ciudades fue precisamente la gran cantidad de arqueólogos que realizaban excavaciones urbanas para sobrevivir, mientras que en realidad sus ámbitos de investigación estaban lejos tanto de la ciudad, como de las fases que se localizaban en estas. Abogué entonces porque hubiese un “reciclaje” de aquellos que realmente quisiesen trabajar en la ciudad, de forma que sus investigaciones académicas o científicas coincidiesen con su objeto de excavación, pero ni siquiera eso se consiguió, ante la feroz oposición de las dos Universidades más grandes de Andalucía.

Pero el supuesto control que trataba de atribuirse a la Universidad no era un error sólo por eso, sino también porque:

“... no se trata sólo de intervenir en un puñado de ciudades, capitales de provincia, mientras el Patrimonio Arqueológico desaparece en el resto. Plantear el problema como si sólo afectase a unos pocos casos, es esconderse de la realidad. Quizá no sea posible desarrollar una política arqueológica urbana de la amplitud que sería de desear, por falta de recursos económicos, pero al menos debe plantearse de forma que sea factible su ampliación en el momento en que esos recursos puedan obtenerse, con independencia de la fuente de que procedan,

y ello implica aceptar que la Universidad no tiene capacidad suficiente para asumir ella sola todas las necesidades que hoy plantea la investigación arqueológica, y que ya existen suficientes arqueólogos formados como para que puedan constituir nuevos equipos, si cuentan con los medios necesarios” (Salvatierra, 1994).

Como corolario de ambas “oposiciones” subrayaba la imperiosa necesidad de que la administración pusiese los medios –económicos y físicos–, para que los arqueólogos que trabajaban en la ciudad, pudiesen articularse en grupos de investigación urbana, que no tuviesen que depender de los grupos universitarios:

“... no nos engañemos, la falta de recursos es el camino más rápido a la dependencia, y a que tales grupos no pasen de ser meros apéndices de los que actualmente existen. No parece demasiado pedir que una política arqueológica coherente empiece por asegurar a los investigadores un lugar donde trabajar, sin tener que depender de la buena voluntad de nadie o de acuerdos sin sentido...” (Salvatierra 1994).

Se trataba por tanto de evitar que a) el control de la calidad de los trabajos escapase de la administración al renunciar a la financiación, b) la adulteración de las intervenciones urbanas por otros intereses de investigación –por legítimos que fuesen estos en sí mismos– y c) evitar la ruptura entre excavación y análisis, es decir, prevenir la instauración del modelo anglosajón.

¹ En 1993 (publicado en 1994) indicaba que: “... uno de los grandes problemas con que se ha enfrentado la Arqueología medieval urbana es precisamente que las intervenciones han esta-

do controladas por especialistas que no tenían ningún interés en dichas fases, y a menudo ni siquiera en la ciudad como objeto de investigación...”

Sobre este último aspecto sí había un cierto consenso en el seno de la Universidad, aunque en la mayoría de los casos era puramente formal.

Mi propuesta de concreción práctica era un ataque a la Universidad, y contraria a los intereses de la investigación, según me señalaron entonces varios de mis estimados colegas. Obviamente era casi un delito pedir que la Junta de Andalucía ayudase a financiar nuevas infraestructuras de investigación, y exigir que las instituciones ligadas hasta ese momento a ella -los departamentos universitarios- que habían gozado -y gozaban aún entonces- de todo el poder, se abstuviesen de intentar ejercer el control. Como es sabido la Universidad siempre ha reclamado en el ámbito de las humanidades en general y de la Arqueología en particular, un exclusivismo de la investigación que mataría de risa a especialistas de otros campos científicos.

No obstante, hay que reconocer que hasta esos momentos una de las características del “primer modelo” andaluz de Arqueología era la interacción de la Universidad y de la estructura administrativa, y desde la Universidad se consideraba que ello, con todos sus problemas, estaba dando frutos muy positivos, y que por lo tanto el modelo sólo necesitaba algunas adaptaciones. Otros considerábamos que los tiempos habían cambiado y que eso exigía una transformación muy profunda.

Por otro lado, debo admitir que en mi propuesta no se explicitaba como y a quién se entregarían esos medios para construir nuevos espacios de investigación. Mi opinión era que debían ser ámbitos comunes, en los que los diversos grupos pudieran trabajar, y que todos ellos deberían articularse para garantizar una dirección conjunta de las investigaciones, ya

que cada ciudad debía considerarse como un solo yacimiento. Este aspecto era sin duda excesivamente idealista.

En cualquier caso, como digo, la opción adoptada fue que la Universidad se hiciese cargo del control. Tamaño dilate, que al igual que yo aunque por planteamientos o motivos distintos, fue rechazado en la práctica por muchos otros, y desde luego por gran parte de los arqueólogos de la administración, hizo que la situación en cada provincia fuese diferente. En alguna, la Universidad trató efectivamente de ejercer ese control -y andando el tiempo apuntó estuvo el tema de terminar en los tribunales-, en otras se inhibió totalmente en favor de la estructura administrativa, y en otras se optó por continuar construyendo día a día una colaboración entre las distintas instituciones y los grupos de arqueólogos profesionales emergentes, aunque de forma inevitablemente contradictoria. Cada lugar debe hacer su propia valoración de la evolución de los acontecimientos y de los resultados alcanzados en esos años. En cualquier caso es un tema que desborda ampliamente los propósitos de esta intervención.

Por otro lado, lo que si resulta hoy evidente es que en todos los casos -y me incluyo- los análisis de la realidad que se hacían eran insuficientes. Lastrados por una tradición centenaria, y por evidentes intereses corporativos, ningún arqueólogo de la Universidad -tampoco, hay que reconocerlo, de fuera de la misma- fue capaz en esos años de prever y analizar realmente la profundidad del cambio que se estaba produciendo. La Arqueología estaba pasando de ser esencialmente una rama de la investigación histórica o relacionada con la Protección del Patrimonio, para convertirse fundamentalmente en una profesión liberal, lo que nos lleva a la tercera Fase.

FASE III

El último intento de algunos círculos universitarios para mantener el control de las intervenciones apenas duró unos años. Hacia 1996 en casi todas partes se estaba dando ya la situación actual. Lo que caracteriza hoy a la Arqueología urbana es la total profesionalización de la misma. Es decir, la ruptura del dominio de los grupos universitarios, y en algunos aspectos incluso de la administración, se ha producido de modo total y efectivo, por la vía del mercado.

Como consecuencia, no se ha creado ninguna estructura estable de carácter general o común a toda Andalucía, capaz de recuperar los conocimientos generados por las excavaciones. No obstante, la situación no es la misma en todas partes. Dependiendo de la evolución de las relaciones entre la Universidad, la administración provincial, las entidades locales y los grupos profesionales, las relaciones actuales entre los diversos colectivos son también distintas en cada lugar.

Por lo que se refiere al problema de la investigación resultante de las intervenciones, cualquiera puede hacer un análisis preliminar de la situación a partir del número de intervenciones publicadas en relación a las efectuadas, y de la existencia o no de análisis de conjunto acerca de las ciudades en las que se ha intervenido, y de los proyectos existentes, para ver cual es la situación objetiva de cada zona. Sin entrar en un análisis pormenorizado, no está demás advertir cómo la peor situación se da precisamente en las ciudades donde las Universidades trataron de ejercer un mayor control, para beneficio de proyectos que nada tenían que ver con la investigación en la ciudad. Y que por el contrario, la flexibilidad en los

planteamientos es lo que ha posibilitado los mejores resultados, pese a los graves problemas que hayan podido atravesarse, de todo lo cual es un buen ejemplo precisamente la ciudad en la que nos encontramos.

El panorama actual tiene una serie de consecuencias de todo tipo, que con frecuencia se viven desde la Universidad como graves problemas. Que estos existen es un hecho, pero creo que no pueden resolverse tratando de encajarlos en los antiguos marcos, sino que hay que generar otros a partir de la propia realidad.

Hay que advertir que la mayoría de los problemas de los arqueólogos profesionales difícilmente pueden tener respuesta desde la Universidad, y sería una temeridad por mi parte entrar en un campo que va haciéndose cada vez más complejo. Son los propios profesionales los que deben buscar y proponer vías de solución para sus problemas². Pero no hay duda de que una parte de los mismos nos afectan a todos aquellos cuya materia de estudio e investigación es la ciudad desde una perspectiva arqueológica, y sobre ellos sí podemos hablar, tanto para ayudar a identificarlos con claridad, como para contribuir a solucionarlos en la medida de lo posible. Creo que las cuestiones más relevantes desde la perspectiva de la Universidad son:

Falta de clarificación sobre quién es arqueólogo

A estas alturas, después de numerosas reformas de la Universidad y de los planes de estudios, la

² Algunos de esos problemas, vistos desde la perspectiva del arqueólogo "libre" o desde las empresas de Arqueología, están siendo analizados por los afectados, aunque se han publicado

pocas aportaciones andaluzas. Véase al respecto por ejemplo algunos textos para la Comunidad Valenciana en: *Actas de las jornadas de Arqueología y Patrimonio Alicante*, Alicante 2002.

administración -del Estado o autonómica- no ha sido capaz de responder a las nuevas necesidades. En estos momentos la falta de exigencias sobre qué es preciso para poder incorporarse a la profesión de arqueólogo, al mercado de trabajo, es total. De hecho, no parece existir ningún criterio. Durante un tiempo (las fases I y II descritas) la situación pudo compararse a la de los arquitectos antes del siglo XVIII: se era arqueólogo porque se había participado en cierto número de excavaciones, porque se había pasado una especie de aprendizaje gremial, aunque ese aprendizaje no estaba reglado, con todas las ventajas e inconvenientes que ello producía. Pero en la actualidad, en muchos lugares, ni siquiera ese mínimo aprendizaje parece necesario.

Resulta interesante observar como otras profesiones han ido cambiando su estructura, pero manteniendo básicamente esos sistemas de aprendizaje -caso de los médicos- y como otras, como por ejemplo los abogados, están tratando de reimplantarlos, aunque sean considerados por los estudiantes afectados como sistemas destinados a limitar su acceso a la respectiva profesión.

Las administraciones que se ocupan de la Arqueología en las distintas Comunidades, decidieron ya hace mucho tiempo que no iban a intervenir en el tema, por lo que la variedad de respuestas según las zonas ha sido notable. En Andalucía, algunas delegaciones provinciales han elaborado listas de arqueólogos donde los promotores puedan seleccionar a un arqueólogo que en cierta forma tiene un aval de calidad, aunque sin que ello les impida la elección de alguien ajeno a las mismas; fuera de Andalucía, por ejemplo en el Levante, los ayuntamientos locales han asumido notables competencias. No faltan zonas donde antes como los colegios de Doctores y Licenciados han tratado de hacerse

con el control. El ejemplo más destacado de esto último es lo que se generó a partir del llamado "Modelo Madrid", que creo que se ha revelado como un sistema excelente para supeditar la Arqueología a los intereses de las mafias urbanísticas. En fin, cada cual contará en este aspecto una historia distinta, que no es otra cosa que la expresión del descontrol existente.

Desde el punto de vista de la Universidad, la única vía que actualmente parece quedar, es la creación de una titulación oficial de Arqueología, que aunque no sacará del mercado a los que ya están, iniciaría el cambio hacia una ordenación del sistema. En teoría parece buena idea, pero las propuestas de titulación que hasta ahora he podido ver, son profundamente conservadoras, en el peor sentido del término. Se trata de volver a un conocimiento minucioso de las etapas prehistóricas y clásicas, una licenciatura en la que las materias que se ocupan de los problemas de gestión, de la Arqueología urbana, de la prevención, de los problemas de la profesionalización, de las formas de acceso al mercado, etc. no existen o son apenas testimoniales. La única interpretación posible de esas propuestas, es la de que bastantes arqueólogos universitarios desean regresar a sus torres de marfil, ya que la realidad de una Arqueología profesional, el contacto con los promotores, arquitectos, constructores, etc. les resulta no sólo sumamente desagradable, sino que posiblemente contamina la pureza del conocimiento.

Debilidad de formación

La no asunción por parte de las Universidades y los profesores de las mismas, de que la Arqueología es ya mayoritariamente una nueva profesión liberal, ha llevado a que no se cambiasen los enfoques y hábitos de enseñanza y trabajo; como resultado seguimos preparando a los estudiantes como si su

opción por la Arqueología fuera a incardinarse en la investigación pura. La Universidad hoy no prepara adecuadamente a los futuros profesionales. Algunas Universidades han avanzado más en este campo que otras, pero todas están aún lejos de lo que debe ser un “estándar” mínimamente aceptable.

Falta de financiación

Obtener de las excavaciones todos los resultados que pueden aportar es imprescindible. Desde la Universidad debemos colaborar, buscando fórmulas que nos permitan obtenerlos, pero creo que la solución debe hacerse respondiendo a las necesidades que se plantean desde la Sociedad Civil, concepto ahora tan de moda. La financiación necesaria es improbable que llegue desde la administración autonómica, ya que a estas alturas está bastante claro que la investigación pura en Patrimonio Histórico no es precisamente una de sus prioridades, ya que la escasa financiación se reserva cada vez más para las grandes exposiciones y actos que permiten la foto, y los reportajes en TV. Creo que la solución sólo puede venir desde la iniciativa privada y desde las administraciones locales. Por ello, la oferta y los planteamientos que se hagan deben ser distintos de los realizados hasta ahora.

Contradicción investigación/profesión

Lo que sucede con los resultados de las excavaciones profesionales es sin duda el punto que más puede afectar a los investigadores situados en instancias como la Universidad. Esa contradicción es lo que con frecuencia provoca el desencuentro entre académicos y profesionales, contribuyendo con frecuencia a oscurecer toda la problemática examinada hasta ahora. Esta contradicción tiene empero dos niveles, el que

afecta a cada uno a nivel individual, y el que afecta a todo el colectivo.

1.- El nivel individual.

1.1. **El rendimiento.** En los últimos tiempos distintas personas me han planteado el problema de la diferencia existente entre los informes que con un motivo concreto se han realizado desde la Universidad, y los generados por arqueólogos profesionales. Diferencias en tiempo de entrega, temas tocados, bibliografía citada... todo al parecer está en contra de los profesionales. Ello evidentemente se relaciona directamente con el tiempo disponible, o más bien con los costes. Y en menor medida con la presunción de la supuesta mayor objetividad de la Universidad.

1.2. **Los costes.** Con gran frecuencia, los especialistas de la Universidad, realizamos informes, u otro tipo de trabajos, por mucho menos dinero -sino totalmente gratis- de lo que se ve obligado a cobrar un profesional que vive de ello, teniendo en cuenta además que disponemos de mucho más tiempo, espacio, y con un equipo de “colaboradores, becarios, ayudantes...” sobre cuya condición social también podríamos discutir bastante. Cabe preguntarse porque otros profesionales de la Universidad que realizan trabajos “para el exterior” exponen sus tarifas sin problemas, mientras que en nuestro caso eso no parece “decente”. Sin duda ha llegado la hora de que nuestras tarifas suban al nivel del mercado. Aunque por supuesto cuando se hace esa sugerencia inmediatamente sale a relucir lo del servicio público, lo del intento de “aprovecharse”, etc. ¡aunque no suele hablarse de la competencia desleal con los profesionales!.

En esta situación, creo que la Universidad, como en algún caso se ha empezado a hacer,

debe, al prestar sus servicios, ser más cara que el profesional, ya que “vende” no sólo el trabajo, sino el prestigio de que goza, y que confiere a sus informes una mayor autoridad científica, quizá no siempre justificada, pero automáticamente supuesta por la sociedad. Una vía abierta, y que cada vez está ensayándose en más lugares, es que los equipos de la Universidad sean contratados a través de las OTRI (Oficinas de Transferencia de Investigación), y a través de la misma puedan a su vez contratar a arqueólogos profesionales al precio del mercado, reservándose la supervisión, y pudiendo incidir en la formación de estudiantes o egresados recientes. Esto, como digo, encarece, pero es un camino que, en principio, evita la competencia desleal, garantiza la corrección de las excavaciones, disminuye la presión directa del promotor sobre el arqueólogo profesional y puede garantizar el estudio posterior de los materiales con cargo a otros proyectos. Naturalmente efectuar esos pagos sólo está al alcance de las grandes empresas o en obras de alto coste, que un arqueólogo sólo no está en condiciones de asumir. Esta vía posiblemente no gustará a algunos profesionales, pero paradójicamente supone dar el último paso hacia la profesionalización total de la Arqueología. En cualquier caso es un modelo hoy en marcha, cuya evolución deberemos observar.

2.- El nivel colectivo.

2.1. **Las polémicas.** En la casi totalidad de las profesiones con un componente de investigación, la persona realiza su trabajo, y no se pide que todos los miembros de la profesión tengan que estar desde el principio de acuerdo en resultados, interpretaciones, etc. y raramente las discusiones entre los especialistas llegan al público, ya que todos (investigadores, medios, público) parten de

la premisa de que sin duda serán demasiado abstrusas para poder entenderlas. Por eso en la mayoría de esas profesiones ha aparecido la figura del Divulgador Científico. Pero los arqueólogos, entre nuestro escaso afán de difusión, el temor a que “nos roben” nuestros resultados, y la poca confianza en los mencionados “divulgadores”, hemos eliminado casi totalmente el nivel de discusión pública. Como consecuencia, cuando por cualquier motivo esta se produce, suele generarse una confrontación que en muchas ocasiones produce la impresión de que no existen argumentos, y de que todo es un rifirrafe sin sentido. Como sabemos, una excavación, y más aún la interpretación de conjunto de una zona o de la evolución de una ciudad, no puede reducirse a un solo problema, sino que se trata de un conjunto de cuestiones históricas, historiográficas, arqueológicas, ideológicas, políticas, culturales, de interpretación, etc. cuya clarificación requiere sobre todo mucho tiempo, mucho trabajo y mucha paciencia. La solución obviamente sólo se alcanzará en los seminarios y laboratorios, pero mientras tanto a veces se hace demasiado ruido.

Y a propósito del ruido ¿Cómo es posible que los arqueólogos se peleen?, esta es otra pregunta que a veces me han planteado. En todas las profesiones las disputas son numerosas, y si hay dinero por medio, más. En todos los colectivos hay luchas, grupos enfrentados (en ocasiones llamados púdicamente escuelas y corrientes), y a todo el mundo le parece normal. Pero que los arqueólogos compartan ese rasgo con el resto de la humanidad parece resultar sorprendente. En realidad tal “sorpresa” es interesada. Mientras más enfrentamientos haya entre el colectivo de arqueólogos de una localidad, mas excusas tendrán las distintas autoridades o responsables de los temas de patrimonio para justificar la inacción: la situación llega al extremo de que en

alguna ocasión ha podido oírse a algún político comentando que “con esta gente no hay nada que hacer...” lo que teniendo en cuenta las actitudes que suelen darse entre los miembros de la profesión de quien hace el comentario resulta de un sarcasmo brutal. La máxima “los trapos sucios en casa” que practican tantos colectivos profesionales, que más que rivalidades mantienen auténticos odios entre sí, quizá debe empezar a ser adoptada por los arqueólogos. Discusión científica toda, y cuando la discusión pública ayude a clarificar, bien venida sea. Pero si sólo introduce confusión, o titulares en la prensa, creo sinceramente que sobra.

Los elementos expuestos hasta ahora son quizá los más visibles desde la Universidad. Hay desde luego otros muchos, que afectan prioritariamente al arqueólogo profesional, y que desde la Universidad sólo se perciben si hay realmente una implicación real en el trabajo de campo. Sólo me referiré brevemente a algunos de ellos.

A.- Falta de poder de decisión. El arquitecto, el médico, el abogado, todos los profesionales que son contratados para hacer un trabajo, tienen un amplio margen para adoptar las decisiones inherentes al mismo, con cierta independencia de sus costes, apoyados en una amplia normativa, incluida la penal (por ejemplo existen unos ciertos mínimos en construcción, y las penas por incumplirlos existen). Raramente, sin embargo, el arqueólogo puede tomar decisiones cruciales, como la de ampliar el área de excavación, ralentizar el trabajo porque así lo exigen las estructuras que aparecen etc. Se excava porque la ley obliga a intervenir para recuperar al menos el conocimiento del patrimonio, pero la normativa es absolutamente laxa, y apenas tiene traducción penal y de ahí lo fácil que es incumplirla, empezando por la propia administración. La “reforma” de

la normativa sobre excavaciones es en parte un maravilloso ejemplo de lo que es no estar dispuestos a abordar los problemas reales.

B.- Falta de clarificación sobre qué se contrata.

Cuando se contrata a un arqueólogo para hacer una excavación, este puede pensar que se trata de realizar un estudio lo más completo posible de la zona, así al menos lo señala la normativa. Pero esta idea no es exactamente la misma que tienen los otros actores que participan en la obra. Aunque la taxonomía en este punto sería muy extensa, cabe aquí distinguir al menos tres grupos que saben perfectamente que es lo que se contrata, que no coincide curiosamente con lo que los arqueólogos suelen creer:

1.- El que en general mejor sabe lo que contrata o al menos para que contrata, aunque a veces no tenga muy claro a quién, es el promotor privado. Quiere que se haga la obra que se le exige para poder construir, y que esta le salga lo más barata posible. Que los resultados de la Arqueología deban ser conocidos, y que por tanto haya que analizar y publicar, no es su problema. Hay que admitir que esto sucede también en todas las otras profesiones, y de ahí la abundancia de publicaciones especializadas, congresos, etc. de las que se han ido dotado las mismas. La Arqueología también dispone de ellas, aunque da la impresión de que en los últimos años han disminuido en vez de aumentar. En cualquier caso, hay muy poco que objetar. La posibilidad de mejorar la intervención sólo puede venir de la mano de la actuación de la administración, o de una legislación penal hoy inexistente.

2.- El político también sabe lo que se contrata. Lo que diferencia a la Arqueología de los otros campos es el foco público sobre ella. La Arqueología, como en general el Patrimonio, interesan al público -por eso se excava y se protege (o se dice que se protege)-. Por ello, los

políticos que controlan las administraciones, que no suelen pagar los trabajos arqueológicos, han decidido que tienen derecho a utilizar el trabajo del arqueólogo contratado por otro con arreglo a las leyes del mercado, para demostrar a los ciudadanos cuanto se preocupan por el Patrimonio. Como en tantos otros temas en nuestro país durante las últimas décadas, con independencia de la supuesta ideología de cada partido, nuestras autoridades políticas han optado por modelos en ocasiones realmente interesantes, pero se han olvidado de los costes. En este sentido los arqueólogos pueden estar contentos, están al mismo nivel que la enseñanza, universitaria o no, los menores sujetos a la ley correspondiente, o los juicios rápidos.

3.- Y el ciudadano, depositario de todos los derechos, también sabe para que se contrata. Años de insistir en la importancia de la Arqueología, en ocasiones dejando creer que se paga con dinero público, y las incomodidades que las excavaciones les provocan, han convencido a muchos ciudadanos de que es su derecho ir a una excavación para hacer la pregunta que creo que más odia un arqueólogo: "Y aquí que sale...". ¿Se imaginan a un ciudadano cualquiera entrando en el quirófano para preguntarle al cirujano ¿"Y este que tiene..."? ¿O en una obra para ver como es el edificio que esta construyéndose?. La curiosidad humana es muy grande, así que sin duda hay mucha gente que si pudiera, lo haría. Pero las distintas profesiones han colocado sus barreras para impedirlo. En este sentido también los arqueólogos avanzan, aunque han tenido que protegerse con telones, alambradas -auténticos monos en la jaula- para poder trabajar, eso sí, ante la irritación de algunos ciudadanos que consideran que se les priva de su derecho a no se sabe muy bien que.

C) Falta de Difusión. Como el Patrimonio es de todos, causa al parecer a algunos una notable irritación que los resultados de las excavaciones no se conozcan. Y los culpables son por supuesto los malvados arqueólogos que no hacen nada, no trabajan, lo ocultan... Sólo dos notas al respecto:

1.- Todos sabemos que con excepción de los que tenemos la suerte de trabajar en instituciones como la Universidad o centros de investigación, no suele haber subvenciones para la investigación posterior a la excavación. De esta forma el arqueólogo debe ser un profesional que cobre poco, pero que sea un investigador de primera fila, y que publique al mismo ritmo que un profesor universitario en vísperas de ir a oposiciones. Eso sí, todo eso que lo pague de su bolsillo. Habría que preguntar a quienes así piensan si estarían dispuestos a cobrar sólo seis meses, pero trabajando todo el año.

2.- La Junta de Andalucía sigue cerrando los ojos a la realidad. Las Jornadas de Arqueología Andaluza, montadas por la Consejería de Cultura desde 1986 acogían exclusivamente los "Proyectos Sistemáticos", reservando un espacio apenas simbólico a las "Urgencias". Hoy, cuando las "sistemáticas" son escasísimas, y las llamadas urgencias suponen más del 90% de toda la Arqueología que se realiza, con inversiones -privadas- enormemente superiores a las de la Junta, se sigue en la misma situación. Ello es el mejor ejemplo de cual es la política actual de la Junta de Andalucía en materia de Arqueología. No obstante el cambio de modelo de esas reuniones hacia temas especializados, quizá estén anunciando finalmente un cambio. El tiempo lo dirá.

LO QUE VIENE: EL FORO DE BOLONIA

A riesgo de abusar de su paciencia debo hacer alusión a lo que viene. La Universidad española está a punto de sufrir un cambio de gran profundidad. Los gobiernos de la UE se han puesto de acuerdo a través del llamado Foro de Bolonia en la necesidad de equiparar los estudios universitarios en todo el ámbito europeo. La información al respecto empieza a ser abundante, o mas bien abundantemente confusa. Hace seis meses se anunciaba que los cambios se iniciarían hacia el 2010, lo que permitía decir aquello tan castellano de “largo me lo fiáis...”, y cuando empecé a reunir material para esta intervención opté por excluir el tema, por esa falta de información y documentación fiable³.

Pero ya se han publicado los primeros decretos sobre el llamado crédito europeo, y hace dos meses los ministros de la UE, decidieron que la primera fase de cambio debía estar completada en 2005, mientras que algunas Comunidades Autónomas han decidido que algunos aspectos del cambio se iniciarán el curso que viene. Simplificando y en lo que nos atañe, el cambio implica que las carreras se estructurarán en dos ciclos, Grado (equivalente a la actual licenciatura) y Postgrado, y este en Master y Doctorado. Al mismo tiempo, se está postulando por parte de nuestro gobierno una nueva modificación en profundidad de las licenciaturas. Se trata de reducir las ahora existentes a la mitad o incluso en 2/3. Es decir, el Grado sería un título generalista, dejando la especialización para el Master y el Doctorado.

Pese a la confusión existente, creo necesario compartir lo que esto parece implicar. La discusión en muchas Universidades está centrándose

en el tema del crédito europeo, pero como decía un político español del siglo pasado: “Que ellos hagan las leyes, que ya haré yo los reglamentos”.

Y este es el punto relevante. Mi impresión es que en la Universidad española se está desarrollando una sorda lucha por la imposición de un modelo –el reglamento-, en el que la mayoría de los profesores hemos optado por no implicarnos, quizá porque estamos muy hartos de cambios en los planes de estudio, y sobre todo despistados por el mencionado crédito europeo. Por su parte los estudiantes y la sociedad en general se han situado completamente al margen, como si el tema no fuera con ellos. Y sin embargo, el futuro puede ser muy diferente según lo que se aplique.

Un título generalista en nuestro campo puede suponer nuevamente la reunificación de los títulos de Historia, Historia del Arte, Bellas Artes, e incluso Geografía. Puede incluso llegar a plantearse una vuelta al antiguo título generalista de Filosofía y Letras, que no lo olvidemos, sólo desapareció en 1973. Aunque desde el punto de vista del especialista, esto no agrade, lo cierto es que en estos momentos, la excesiva especialización desde el inicio está causando numerosos problemas, por la falta de preparación. La cuestión sin embargo no está tanto en un primer ciclo general, sino en como se concreta.

La anterior Ministra, persona bien conocida por su fuerte alergia a que los estudiantes tengan capacidad de decisión, pretendía imponer ella el 70% de los contenidos de cada carrera de grado. Se trata de la opción de los círculos ultraconservadores de la Universidad, muy enfa-

3| Este texto se escribió antes del último cambio de Gobierno; por lo tanto algunas de las cuestiones que siguen, pueden haber cambiado

dados porque el sistema de múltiples optativas les hizo perder el control sobre los estudiantes, y que quieren un sistema donde la innovación esté proscrita, ya que hace décadas que dejaron de innovar. Creo que en Arqueología son pocos, pero quizá resulte fácil reconocerlos, serían los amantes de los apuntes amarillentos, y que siguen considerando que al hablar de metodología arqueológica hay que reservar un lugar de honor a Mortimer Wheeler y a la excavación por capas artificiales.

Un segundo grupo, que en general representa los intereses de las grandes Universidades del país, y que hasta cierto punto puede coincidir con los primeros, ha optado por no luchar en el campo del título de grado, y han empezado a elaborar planes de postgrado. Son los que cuentan con que dispondrán de bastantes estudiantes por sí mismas, y que inevitablemente absorberán a los de las pequeñas Universidades incapaces de montar los ciclos de postgrad o por no contar con suficientes estudiantes. Para estos grupos, todas las Universidades tendrían el título general, y el que quisiera especializarse debería ir a una de esas Universidades. Por lo que se refiere a la Arqueología, creo que a la anterior Ministra se le facilitó la lista de las diez Universidades españolas en las que podrían establecerse los estudios de esta disciplina.

Un tercer grupo aboga por la instauración de un sistema anglosajón. Es decir, un título generalista, pero en el que la troncalidad y obligatoriedad fuese mínima, o limitada a uno o dos años para garantizar la adquisición de conocimientos generales, con una amplia oferta de optatividad en los siguientes, que posibilite realmente al estudiante la construcción de su propio curriculum. Es la opción defendida por los sectores más dinámicos de la Universidad, y que por ello mismo no tienen problemas con la innovación. Es el sector que más tardíamente se ha puesto en movimiento, generalmente en Universidades de tamaño medio

o pequeño. No se de ningún grupo que en Arqueología haya hecho una apuesta por esta línea.

Obviamente la cuestión no es el crédito europeo, ni si las carreras van a ser generalistas, la cuestión es como van a concretarse. Y ese tema aún, creo, no está decidido. Según el marco que se cree, la Universidad podrá responder o no a la nueva situación, y cambiar definitivamente para aceptar que la Arqueología es ya una profesión liberal, o tratar de retroceder nuevamente hacia el elitismo.

TERMINANDO

Aunque pueda parecerlo, y aunque problemas como la contradicción entre investigación/profesión o como recuperar los datos de las excavaciones realizadas por profesionales puedan hacer creer que el debate actual de la Arqueología urbana es el mismo de hace quince años, esto no es así. La Arqueología es ya fundamentalmente una profesión liberal, como la medicina o la arquitectura; cuanto más tarde la Universidad en aceptarlo, y en hacérselo entender a la Administración, peor irán las cosas.

Y es la Universidad quién tiene que hacérselo entender a la Administración, porque nos conviene. Mientras las propuestas de titulaciones y los discursos de la Universidad sigan siendo exclusivamente académicos, la Universidad irá quedando cada vez más marginada de las decisiones reales. Ya hoy algunos ayuntamientos empiezan a asumir competencias, y diseñan estrategias de actuación arqueológica prescindiendo total o casi totalmente de la Universidad. El cambio de orientación de la enseñanza de la Arqueología en la Universidad es un elemento que puede ayudar a la transformación, y que puede permitir que la Universidad sea uno de los pilotos. O cambiamos, o nos arrumbará la realidad.

BIBLIOGRAFÍA

SALVATIERRA CUENCA, V. (1994), "Historia y desarrollo del modelo andaluz de Arqueología". *Trabajos de Prehistoria* vol. 51.1., pp. 1-13